

El libro y la lectura: un asunto público

Paulo Slachevsky

Una y otra vez durante la postdictadura los temas del libro y la lectura han quedado al margen de los ejes de las políticas públicas más significativas. Al igual que la problemática de los medios de comunicación, a estos temas se les ha dado el rango de “asunto de un sector específico”, temas de “especialistas” o de profesionales del área. Entre otros, la cuestión también ha estado ausente de los grandes debates sobre el futuro de la educación en el país. Pero, ¿acaso es posible pensar una educación de calidad sin enfrentar el déficit de comprensión lectora? ¿Es sincero hablar de una verdadera democracia con un pueblo sin capacidad reflexiva y crítica? ¿Es posible socializar estas capacidades sin lectura, sin el libro? ¿Es factible enfrentar la desigualdad sin buscar equiparar el acceso a los bienes culturales? ¿Es viable pensar en el desarrollo, en un país sustentable, limitándonos a ser exportadores de materias primas?

Frente a estas preguntas, me asiste la convicción de que el libro y la lectura son asuntos de interés público, claramente transversales a muchos de los desafíos que tenemos como país. Para mejorar la educación, democratizar la sociedad y generar mayores condiciones de igualdad, se hace necesario cambiar la relación de la ciudadanía con el libro. Sin duda esta no es una condición suficiente, pero sí una condición necesaria para contribuir a la construcción de un país desarrollado y sustentable. Por ello es tan importante que el Consejo Nacional del Libro y la Lectura haya centrado su quehacer, durante el primer periodo de este gobierno, en elaborar la nueva Política Nacional de la Lectura y del Libro, así como el haber dado inicio a su implementación. Esta Política, construida a través de un proceso participativo en el que recoge parte importante de las propuestas, es una estrategia sistémica que aborda toda la cadena del libro, potenciando su democratización en la sociedad chilena. Fortalece también las condiciones para que como país tengamos un rol proactivo en la elaboración y producción de conocimiento, buscando resquebrajar el colonialismo cultural que nos domina y la brutal desigualdad en el intercambio Norte-Sur.

A diferencia del 2006, año en que se aprobó una versión anterior de la política –nunca implementada como tal–, ¿seremos ahora testigos y partes de una real aplicación de esta propuesta? ¿Existe verdadera voluntad política de potenciar una ciudadanía más activa, culta, pensante y creativa, que avance hacia una participación efectiva, sentando las bases de una real soberanía popular? ¿Es posible, en estos tiempos, revertir las inercias propias de la gestión pública y avanzar en la articulación de las iniciativas y las energías entre diversas áreas de la institucionalidad pública y de la sociedad civil en favor de una política general que potencie transformaciones de fondo en torno al rol del libro en nuestra sociedad?

El libro, entre el mercado y lo público

Las demandas del movimiento estudiantil del 2011 pusieron nuevamente al centro de los debates del país el tema de lo público. Décadas de dominio neoliberal llevaron a su extremo la sacralización del mercado, que permeó todos los ámbitos de la sociedad chilena, privatizando completamente nuestras vidas. Y la medida ya no fue la de lo posible, si no “cuanto tienes, cuanto vales”. Nada quedó fuera de la ambiciosa e insaciable mano del mercado: desde el agua a la pensión de vejez; desde la educación a la salud; desde nuestro tiempo a nuestros sueños, nada quedó fuera de su alcance; tampoco entonces la cultura y la política. Se naturalizaron las prácticas de un modelo económico que sacó de escena lo público, lo que todos construíamos colaborativamente para el beneficio colectivo, para el bien común.

La crisis que vive la sociedad chilena hoy tiene sus bases en esa historia de despojo y de entrega. Como señaló Orlando Letelier semanas antes de ser asesinado en Washington por la DINA, el modelo económico y la tortura y represión política son las dos caras de una misma moneda. Hacia finales de la dictadura quedó de lado la práctica sistemática de la tortura política; sin embargo, se reforzó y consolidó la otra cara de la moneda: el modelo económico.

De esta manera, el libro fue también absorbido por la lógica neoliberal, relegando su sello cultural, dominando su carácter comercial, como si se tratase de una mercancía más. La relevancia de las obras pasó a medirse con el cuánto vende. La misma censura, de ser política y religiosa, se reconfiguró en censura de mercado y, como es el caso con otras prácticas en ese ámbito, pasó a reinar de manera casi inadvertida, o naturalizada. La resistencia a ese dominio comercial dio lugar al movimiento de editores independientes: quienes precisamente deben funcionar bajo las mismas reglas del mercado, como presuntos empresarios, son los que principalmente han buscado rescatar el carácter cultural y público del libro, liberando este milenario objeto de las camisas de fuerza de los mercados.

De hecho, la historia de la edición ha estado marcada por numerosas batallas en favor de algunos de los principios fundamentales que sustentan los proyectos de sociedad más democráticas, de ciudadanos activos y participativos, donde el sentido de lo común y lo público cobra fuerza. La defensa de la libertad de expresión, de pensamiento y de creación se refleja una y otra vez en las luchas de creadores, periodistas y editores contra Estados dictatoriales y/o totalitarios. Hoy ese totalitarismo se plasma en el mercado. La misma concentración en la industria editorial y de las comunicaciones a nivel mundial ha llegado a niveles nunca antes vistos, ni siquiera en el peor de los totalitarismos. En recuperar el carácter cultural, social y público del libro se expresa el sentido mismo de esa resistencia.

Por lo demás, lo público está en la base misma del quehacer editorial. Todos sabemos que la función del editor/a es publicar. Y “publicar”, según la definición que hace el diccionario, es “hacer público”, “patente” algo. La misma creación intelectual, que está en la base de la producción editorial, y que es protegida por los derechos de autor, no es una propiedad cualquiera, tiene en sus orígenes características propias de los bienes públicos, no se agota cuando una la “consume. Por lo demás, la creación se nutre de la creación de otros, florece de las semillas que dejan otros. En tal sentido, al igual que es básico resguardar el equilibrio entre los derechos del autor y de la sociedad toda en acceder al conocimiento, a la libertad de expresión y a la comunicación, al derecho de seguir creando libremente, es fundamental resguardar el carácter cultural, educacional, social y público de los libros, libre de las lógicas propias de los mercados. En *A la sombra de los libros. Lectura, mercado y vida pública*, Fernando Escalante Gonzalbo destaca: “El bien público que se defiende cuando se trata de proteger la cultura del libro es una determinada estructura de la vida pública”(2007:343). Una determinada estructura de la vida pública –una cultura– donde el mundo del libro no se asimile al *star system* de Hollywood. Una cultura donde se promueva la reflexión crítica, la memoria, la creación, y los más diversos ámbitos de la creación humana, como la poesía, la filosofía, el teatro, y no solo los *best sellers*. Una estructura de la vida pública donde el libro recupere su carácter liberador, potenciando una democracia participativa y no sólo representativa.

Una política que nace desde la ciudadanía

El año 2000, cuando se funda la *Asociación de Editores Independientes*, hoy *Editores de Chile, asociación de editores independientes, universitarios y autónomos*, se hace explícita una voz desde la ciudadanía que busca recuperar en la sociedad chilena el carácter cultural, social y político del libro. Como señala su Manifiesto: “Comprometidos con el carácter cultural de la labor editorial en la cual nos desempeñamos, con el libro como una de las máximas expresiones de nuestra humanidad y de la

capacidad creativa del ser humano, con la palabra escrita como una expresión liberadora, con la lectura forjadora de ciudadanos, sujetos activos con voz propia, nos hemos reunido los Editores Independientes de Chile”.

Desde sus inicios, el quehacer de la Asociación se centró en trabajar para democratizar el libro, recuperar la valorización simbólica de este objeto en la sociedad chilena y potenciar la creación y producción local. El año 2002, bajo el alero de la Fundación Chile 21, se creó “la mesa del libro”, donde se trabajó para fortalecer el rol del libro y la lectura en la sociedad chilena. Ese año, junto a otros actores del sector del libro y Chile 21, se entregó al ministro Heraldo Muñoz en La Moneda, una primera propuesta, “Acceso al Libro y Fomento a la Lectura”, sin lograr mayor respuesta por parte del gobierno. El año 2003, junto a Chile 21 y ProChile se organizó en los subterráneos del Palacio de La Moneda, el seminario “Industria del libro en Chile, espectadores o protagonistas en la globalización”. Fueron entonces varias las iniciativas desarrolladas y de distinto orden. Desde la práctica misma, poco a poco se fue consolidando la conciencia de que para romper el círculo vicioso que vivía el libro en Chile desde el golpe militar, era fundamental el diseño e implementación de una estrategia sistémica que enfrentara los desafíos pendientes, pensando en toda la cadena del libro y la lectura. La publicación el año 2005 de *Una política de Estado para el libro y la lectura. Estrategia integral para el fomento de la lectura y el desarrollo de la industria editorial en Chile* marcó un claro punto de inflexión en los intentos desde la sociedad civil para que el Consejo del Libro y la Lectura no siguiera centrando todo su quehacer en los fondos concursables, que de instrumento terminaron transformándose en fin. Pese a que la misma ley señala que es función del Consejo del Libro “Asesorar al ministro de Educación en la formulación de la política nacional del libro y la lectura”, doce años después de promulgada la ley, fue desde fuera del Consejo, institución donde Editores de Chile aun no tenía participación, que surge el primer diseño de una política para el sector.

Ese mismo año 2005, el ministro de Cultura José Weinstein acogió la propuesta elaborada por Editores de Chile junto a Chile 21. En base a esta, desde el Consejo de la Cultura se trabajó una nueva versión. Ricardo Brodsky, quien coordinó la última etapa de la mesa del Libro, redactó la “Política Nacional del Libro y la Lectura”, que fue aprobada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y presentada en la Feria Internacional del Libro de Santiago en octubre de 2005. La falta de ratificación de esta Política por los consejeros del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dejó inválida la propuesta, siendo elaborada una tercera versión –que consideraba varios cambios– el año siguiente, cuando era ministra de Cultura Paulina Urrutia. Lamentablemente, dicha política oficial no fue nunca implementada en los hechos. Se siguió actuando en materia del libro y la lectura desde el Estado, pero sin articular ese accionar en base a un objetivo común y una coordinación de ese quehacer. La misma iniciativa emblemática de esos años, *El maletín literario*, dio cuenta de la dispersión del quehacer público en la materia, la muy superficial vinculación del Consejo de Libro, la Dibam y del Ministerio de Educación. Cada organismo llevaba adelante sus propias iniciativas sin tomar mayormente en cuenta las instituciones hermanas, menos la Política. El Consejo de Libro siguió centrando sus energías, reunión tras reunión, en los concursos, y la continua insistencia desde la Asociación de Editores para implementar la Política no tuvo efectos.

Durante la campaña electoral del año 2013, articulados por Editores de Chile, las tres asociaciones que reunían a editores –Editores de Chile, la Cámara del Libro y la Furia del Libro, hoy Cooperativa de Editores de la Furia–, les hicieron llegar una carta a los candidatos a la presidencia insistiendo en la importancia de incluir en sus programas de gobierno “la actualización e implementación de la Política Nacional del Libro y la Lectura, coordinada de manera conjunta por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Ministerio de Educación”, junto a otras cuatro propuestas en torno al libro y la cultura. En esta misiva se insistía en el rol transversal del libro y la

lectura en muchos de los desafíos que teníamos como sociedad. Fueron varias las reuniones que los representantes de las asociaciones sostuvieron con los candidatos y/o sus encargados de cultura. Con la participación de escritores, bibliotecarios, librerías, editores independientes y universitarios, y ciudadanos vinculados al mundo del libro, se logró que la Política de Libro y la Lectura quedara plasmada en el Programa de Gobierno de Michelle Bachelet, “Crearemos el Plan Nacional de Lectura y una Política Nacional del Libro que haga de Chile un país de lectores y lectoras desde la primera infancia” –Bachelet (2013:133).

El año 2014, la nueva secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura, Regina Rodríguez, asumió con fuerza el desafío del programa. Convocó abiertamente a una construcción participativa de la nueva política, recuperando la figura de las mesas del libro. En base a la política del 2006, en Santiago, agrupados en mesas temáticas –fomento de la lectura, Educación y Lectura, Creación, Industria e Internacionalización, Patrimonio, Marco Jurídico e Institucionalidad, Libro digital– se elaboraron propuestas que sirvieron de base de la nueva política. También llegaron propuestas de las reuniones convocadas en regiones. En octubre, en una segunda reunión ampliada, representantes de las comisiones presentaron las propuestas. En base a estas, una comisión del Consejo del Libro y la Lectura, en la cual participó Juan Carlos Sáez, el representante de Editores de Chile ante del Consejo en ese momento, redactó la propuesta final de la Política que fue aprobada por el Consejo de la Cultura. Si bien parte importante de las propuestas de la sociedad civil quedaron integradas en la política, en la etapa de negociación con otros ministerios en torno a las medidas que articulaban el que hacer de más de una institución pública, algunas propuestas emblemáticas –como el tema del IVA al libro– fueron lamentablemente excluidas, y otras rebajadas en su alcance. Quienes fueron elegidos como representantes de las diversas mesas pudieron participar de una reunión en diciembre de 2014 para analizar y discutir una de las versiones finales de la propuesta, pero ya no era mucho lo que se podía hacer. Por más abierta que sea la voluntad de quienes están a cargo de la elaboración de ciertas políticas, no es fácil abrir el funcionamiento del Estado a una participación efectiva que vaya más allá de lo propositivo. Transparentar y abrir a la discusión los mecanismos de decisión final en torno a las acciones y medidas de una política pública es sin duda un desafío que deja este proceso. En abril del 2015, en la fecha que se conmemora el Día Internacional del Libro y la Lectura, la ministra de Cultura Claudia Barattini presentó la nueva política, abriendo paso entonces a su implementación.

Una política que busca abrir un círculo virtuoso para el libro y la lectura en Chile

La Política Nacional de la Lectura y el Libro (PNLL) es una propuesta sistémica que aborda toda la cadena del libro y la lectura, buscando a través de diversas medidas democratizar el libro en nuestro país, potenciando a su vez la creación y producción local. Al igual que las versiones anteriores, es transversal a esta propuesta la idea de potenciar una ciudadanía más consciente de su papel en la sociedad, una ciudadanía más participativa, más deliberante y creativa: “Concebir la lectura como parte fundamental de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, considerándola factor esencial en la formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, reflexivos, críticos y participativos y constructores de procesos democráticos” –Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015:29).

Dividida en seis ámbitos de acción que consideran propósitos orientadores, objetivos, medidas específicas e instituciones responsables, la política busca enfrentar directa o indirectamente varias de las limitaciones que ha tenido la acción pública en torno al libro y la lectura durante la postdictadura. Pese a todos los recursos invertidos y esfuerzos realizados en este ámbito, los bajos niveles de comprensión lectora por parte de la ciudadanía se mantienen. No deja de impactar cómo las mediciones de competencias básicas realizadas por el Centro Microdatos de la Universidad de Chile no muestran mayor variación entre los años 1998 y 2013. En el mismo período, son miles de millones de pesos los

que se han invertido en libros de texto repartidos a escolares en todo el país. En tal sentido, a diferencia de varios otros países de Latinoamérica, no podemos afirmar que la ausencia de recursos invertidos en libros es una de las razones por las cuales no hay mejoras sustantivas en la comprensión lectora, sino en el cómo esos recursos se han invertido. Datos obtenidos con el Ministerio de Educación a través de la Ley de Transparencia Pública dan cuenta de que el año 2013 se gastaron más de 28 mil millones de pesos en textos escolares, IVA incluido, 20.225.000 textos para el estudiante y 525.000 para los docentes. ¿Cómo es que años de compras de este tipo no han podido ayudar a cambiar las cosas? No deja de ser relevante que de esta suma, \$ 8.778.981.438 millones –el 31%–, se concentró en una sola editorial española, Santillana, lo que representa casi 20 veces todo el presupuesto del Consejo de Libro para la compra de libros chilenos ese mismo año, único programa que centra su interés en la producción nacional.

La medida aprobada durante el proceso participativo de elaboración de la Política en la mesa de industria e internacionalización: “Repensar y reformular el sistema de adquisición y uso de textos escolares potenciando la diversidad editorial, limitando la concentración, rebajando las barreras de acceso, potenciando su aporte efectivo al proceso educativo como a la comprensión lectora” –Proceso participativo de elaboración de la PNLL (2014:4)– quedó profundamente deslavada en la versión final del documento: “Promover el establecimiento de una mesa técnica, que pueda aportar insumos para una mejora continua de la política pública respecto a la calidad de textos escolares” –Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015:33)–, pero aún puede servir para poner en discusión este tipo de adquisiciones públicas. Destinar menos recursos a la compra de textos escolares y más a libros de literatura y otras disciplinas que se repartan entre los mismos estudiantes ¿no sería acaso un mecanismo mucho más potente para potenciar la capacidad lectora, la curiosidad y el aprendizaje de los alumnos? Plantear interrogantes, establecer un espacio de discusión abierto sobre los modelos de acción que año a año se repiten, es una necesidad imperiosa, propia de todo quehacer que busca mejorar.

Activar la producción intelectual local y frenar nuestro carácter dependiente en el intercambio de libros con España y países del Norte, también está presente en la Política, y está al centro del capítulo en torno a Industria e Internacionalización. El propósito orientador propone: “Crear las condiciones para el desarrollo de una industria del libro nacional y regional sostenible, en formato impreso y electrónico, que permita incrementar y fortalecer la producción creativa e intelectual, así como la producción y circulación editorial que asegure un intercambio equilibrado del libro chileno dentro del país, con América Latina y el mundo, poniendo en valor la bibliodiversidad, el desarrollo del pensamiento local, indígena y de las diversas manifestaciones de nuestras expresiones culturales: urbanas, rurales, indígenas y no-indígenas” –Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015:34). De hecho, a excepción de algunos programas del Consejo del Libro y la Lectura y de ProChile, este propósito ha sido uno de los grandes ausentes de las políticas públicas relacionadas con el libro, lo que se refleja con claridad en las adquisiciones realizadas por las instituciones públicas. En textos escolares, la abrumadora mayoría de las adquisiciones se concentra en empresas extranjeras; también en las compras para bibliotecas públicas y escolares, los otros dos principales presupuestos de compras de libros por parte del Estado. En este último caso, de los casi tres mil millones que compró el CRA (Centros de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación) el 2013, según cifras obtenidas a través de Transparencia Pública, más del 70% tienen ISBN extranjeros, libros importados.

Los datos expuestos podrían representar un botón de muestra de la total falta de conciencia en muchas instituciones públicas vinculadas a la educación, a la cultura y al libro, del efecto multiplicador que podrían tener las políticas de estas instituciones, al ser ellas motor de un ecosistema propio en la creación y producción intelectual local. A la hora de tomar decisiones, prima el subjetivo argumento de la presunta “calidad”, que sin duda tiene su matriz en las cabezas colonizadas que parten negando y, en

el mejor de los casos, dudando respecto a las capacidades intelectuales y materiales de la producción propia, y terminan marginalizando a la producción local. También domina el argumento de “lo que pide la gente”, olvidando, quienes deciden las compras públicas, que difícilmente se puede pedir o seleccionar aquello que no se conoce, lo que no se muestra. Esto ha significado retroalimentar por años un lamentable círculo vicioso. Por ello en la Política Nacional de la Lectura y el Libro la medida que busca “Instalar una instancia de participación, para que las instituciones públicas y organizaciones de autores y editores promuevan la creación de contenidos diversos en la industria local y aseguren criterios de pertinencia, calidad y diversidad en la oferta y en las compras de libros, que permita aumentar progresivamente, hasta un 60% del monto de las compras públicas de cada programa de ediciones nacionales” –Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015:36)– ayudará sin duda a revertir esta realidad, como también a terminar con criterios de selección secretos y arbitrarios.

Los desafíos de una implementación participativa

Una implementación efectiva y participativa de la Política Nacional de la Lectura y del Libro conlleva enfrentar varios desafíos; entre ellos, romper con la carga de la propia “tradicción” de las políticas en esta materia, elaboradas pero no aplicadas. También, con superar prácticas que confunden la participación con *focus group*, con la respuesta a encuestas, o la confección de listas de deseos o prioridades. Ello no constituye participación. Tampoco, la participación cultural puede limitarse al derecho de “acceso a la cultura”, concepto bajo el cual aparecía la cultura en la *Guía para organizar encuentros locales* de los *cabildos ciudadanos*. El derecho a la cultura es mucho más amplio que el derecho de acceder a la cultura, no se reduce a una lógica de consumidores culturales. Cuando en el país se debate en torno a una nueva constitución, es fundamental lograr que los procesos participativos sean efectivos, que se hagan cargo de los verdaderos sentidos de la participación ciudadana, y potenciemos en ese sentido una real participación en la vida cultural de la comunidad de la cual somos parte.

Como se trata de una política pública que recupera el sentido social y cultural del libro por sobre su carácter comercial, potenciando una acción conjunta del espacio público y la sociedad civil, más allá de las lógicas del mercado, no sorprende mucho que ella provoque rechazo a quienes quisieran que sólo aumenten los “consumidores de libros”, entendiendo esta actividad como una mera entretención, sin preocuparse en paralelo del qué se lee y cómo se lee, desde dónde se piensa y se publica, interrogantes que ayudarían a romper, entre otros, con el colonialismo cultural que nos domina. Explícita y/o implícitamente, hay actores del mundo del libro que estiman y propician que la mejor política del sector sea la ausencia de toda política, dejar esto al dominio del mercado, un mercado en el que, por lo demás, hasta ahora el Estado ha jugado un rol fundamental, como un gran comprador, favoreciendo en los hechos la concentración y el enriquecimiento de la industria española.

No es anodino, en tal sentido, tener muy presentes las tensiones entre comercio y cultura que cruzan el mundo del libro a la hora de analizar el escenario donde se implementa una política pública. La misma existencia de Editores de Chile y la Cooperativa de Editores de la Furia se vincula a esas tensiones. Como ya se señaló, la aplicación de la lógica neoliberal al ámbito cultural y el predominio de las “razones” comerciales en el sector del libro provocaron la articulación de redes de resistencia que constituyeron el movimiento de editores independientes en muchos puntos del planeta.

A nivel de la cultura en general, fue la defensa de la diversidad cultural la que aunó las voluntades de Estados y sociedad civil en defensa de las expresiones culturales locales, las que no pueden ser dependientes del mercado. La concentración a nivel mundial en el cine, la música, el libro, demostró que sin una acción de equilibrio por parte de los Estados, la creación y producción cultural

local en muchos países del mundo corría serios riesgos de desaparecer. Al igual que la biodiversidad, se requería proteger y fomentar la diversidad cultural. La elaboración y aprobación, en el año 2005, por casi todos los países miembros de Unesco, de la *Convención Internacional para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales* marcó un importante hito. Mientras las fuerzas del mercado buscan imponer en los tratados de libre comercio que los bienes y servicios culturales, así como los derechos de autor, sean tratados como una simple mercancía, inhibiendo toda acción de los Estados en la materia, la sociedad civil y las autoridades culturales de muchos países buscan que la producción cultural sea tratada de manera particular, considerando que es portadora de “identidades, valores y significados”, como señala la Convención. Nuestro país tempranamente ratificó la Convención de Unesco, y la sociedad civil participó activamente del movimiento internacional en favor de esta, y por reservas para la cultura en los tratados de libre comercio. La *Coalición Chilena para la Diversidad Cultural*, la segunda asociación de su tipo a nivel internacional, que reúne asociaciones profesionales de diversos sectores, incluyendo a los editores independientes, tuvo un activo rol en la materia desde su fundación el año 2001. Fue desde la misma sociedad civil que se interpeló al Estado a resguardar nuestra capacidad reguladora en cultura. Al mismo tiempo que se creaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin tener consideración alguna por excepciones o reservas en cultura por parte de la propia institucionalidad, amarrando de manos al futuro Consejo de la Cultura. Por la presión de la sociedad civil, se logró entonces una reserva de limitado alcance en el tratado. Desde ese año, la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural no ha cejado en su lucha por salvaguardar la cultura de las lógicas que imperan en los tratados de libre comercio, siendo el último capítulo la negociación por el TPP.

De esa misma lucha, editores de la Asociación de editores independientes de Chile acuñaron el concepto bibliodiversidad: la defensa de la diversidad cultural en el mundo del libro. Las mismas prácticas de construcción colectiva, conjugando saberes y experiencias, fueron relevando, por parte de los editores independientes –actores culturales en el ámbito del libro–, la importancia de la acción pública, la necesidad de una política del libro y la lectura. Como señala el sociólogo francés Pierre Bourdieu en su artículo *La revolución conservadora en el campo editorial*, a fines de los noventa se consolidó el dominio del polo comercial sobre el polo del arte en el campo editorial. Ello fragilizó la cadena del libro en la cual primaba lo cultural en un amplio espectro, lo que posibilitaba fortalecer una producción intelectual viva y propia, con cierta independencia de las lógicas de mercado. En un escenario donde domina lo comercial, la irrupción de una acción pública más coordinada, con principios orientadores que vayan más allá de las lógicas del mercado, incomoda ciertos intereses.

Entre otras tensiones que debe enfrentar la implementación de la política del libro, no está ausente la complejidad de exigir una acción conjunta en su implementación por parte de varias instituciones públicas y de la sociedad civil. Ello obliga a modificar los modos de operar de quienes están acostumbrados a actuar como dueños y señores desde sus dependencias, como islas, sin consideración alguna por otros que realizan labores similares. La ausencia de confianza y de sentidos de comunidad entre los diversos actores de un mismo sector es fuerte, predomina muchas veces el sentimiento de que los otros están en la vereda de enfrente. Tanto a nivel de las instituciones públicas como en la sociedad civil, es necesario reforzar los sentidos de comunidad entre los actores locales que se inclinan por el polo cultural: autores, editores, profesionales del libro, libreros, bibliotecarios, traductores, funcionarios que trabajan en la administración pública en torno al libro, son parte de un mismo ecosistema. Como señala Bourdieu, la declaración explícita de las cosas puede contribuir a articular la solidaridad entre los actores y reforzar la resistencia ante las fuerzas del mercado. Difícilmente se multiplicarán las capacidades lectoras de la ciudadanía, las posibilidades para escribir y publicar de los escritores y académicos, si no se potencian al mismo tiempo las capacidades editoriales del país, las posibilidades de acceso al libro chileno que, entre otros, es por lejos más económico que el

libro importado. El devenir de la industria nacional del libro está estrechamente vinculado al devenir de los autores, bibliotecarios, librerías, posibles lectores; no son mundos apartes, veredas opuestas, intereses esencialmente contradictorios. Sólo un trabajo mancomunado tendrá efectos significativos que posibiliten el desarrollo y sustentabilidad de este ecosistema. En tal sentido, poco ha contribuido a ello un accionar público centrado en fondos concursables donde cada uno compite con el otro. Es así entonces que la Política Nacional de la Lectura y del Libro significa no sólo pasar a otro nivel en el tipo de políticas a desarrollar, sino que también habrá de contribuir a congregar en vez de dispersar, a crear y ampliar una comunidad ligada al conocimiento cuyo eje es el libro.

La lectura tecnocrática de las políticas, que la desprenden de su cuerpo articulador, de sus principios orientadores, dejando medidas sueltas y aisladas, es otro de los desafíos que debe abordar la implementación de esta política. Una medida sacada de su contexto, muchas veces no significa nada, pierde todo sentido. Los criterios de evaluación en la implementación de la política deben cuidar particularmente este aspecto, pues si no se atiende esta problemática, muchas veces se generan efectos perversos que terminan bloqueando los efectos multiplicadores de cada medida. Estamos ante un tema complejo, con múltiples variables y, en tal sentido, no puede resumirse en evaluaciones simples, unilaterales. Las evaluaciones descontextualizadas inducen a reproducir una y otra vez una misma realidad, cortando alas a la inventiva y a la diversidad. Un ejemplo de ello es evaluar los libros y las adquisiciones de una biblioteca por la cantidad de préstamos que logran. Puede ser, sin duda, un criterio a considerar dentro de una pauta más general, pero centrar la atención sólo en criterios cuantitativos de ese tipo termina reproduciendo las lógicas del *rating* de la televisión, que de calidad nada han aportado y sí han anulado la diversidad, los niveles más profundos y complejos de la producción cultural, consagrando además el dominio del mercado en los medios de comunicación.

En este contexto, sumados los avatares propios del cotidiano y las dificultades propias de la participación ciudadana (cuesta involucrarse y sumar en el trabajo colectivo, reconstruir confianzas y lograr constancia en la participación), la implementación de la Política no es tarea fácil. Desde su presentación, en términos generales, los principales avances han sido fundamentalmente en el diseño, estructuración e instalación del modelo de implementación. Varios niveles reúnen a los diversos actores de la política: comité interministerial, mesas técnicas públicas, mesas mixtas y comisiones de trabajo del sector público y de los representantes de la sociedad civil. Las dos últimas instancias están estructuradas en base a cada uno de los ámbitos de la política y son el soporte del mecanismo participativo de esta. Las mesas son abiertas, reúnen a todos los actores interesados en participar de un ámbito. En ellas se eligieron como coordinadores a representantes de la sociedad civil. De estas mesas se conformaron comisiones –más de una para algunos ámbitos–, las que en algunos casos para ser más operativas quedaron con uno o dos representantes por asociación partícipe, y similar cantidad por los que no eran parte de ninguna asociación.

Si bien a inicios de año ya estaban funcionando las diversas instancias, la renuncia de Regina Rodríguez a la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura a principios de 2016, tarea que asumió Paula Larraín en marzo, generó un período de suspenso en torno a la política. Desde la misma sociedad civil se buscó reactivar el proceso. Para ello, los coordinadores de las comisiones se reunieron con la secretaria ejecutiva, reafirmando el compromiso del Consejo en torno a la Política. En mayo, una segunda reunión posibilitó el encuentro de los coordinadores de las comisiones con las contrapartes del sector público, acordándose la constitución de un espacio de trabajo periódico de ese tipo, pues es fundamental la articulación de los diversos ámbitos de la política. A la fecha, ya están convocadas nuevas reuniones de las mesas mixtas. Será fundamental entonces dar mayor celeridad al proceso de instauración de la política y lograr avances concretos, tanto en algunas medidas específicas como en su implementación general. Es básico lograr que hacia el final del mandato de la presidenta Michelle

Bachelet, la Política sea una realidad instalada y legitimada como política de estado, de manera que no se pueda volver atrás y finalmente esta quede en nada. En general, los mismos actores del mundo del libro no tienen claro conocimiento de la Política, y confunden el Plan Nacional de Lectura con la Política, siendo que este es una de las medidas de la misma. Por eso es también importante ampliar la participación en el proceso de implementación, como también fortalecer su difusión.

Una oportunidad histórica

El golpe de Estado de 1973, que marcó a sangre y fuego al país, sin duda selló un antes y un después para el libro en Chile. Como da cuenta Bernardo Subercaseaux en la *Historia del Libro en Chile*, durante toda la República se concibió al libro como un instrumento fundamental para educar, formar ciudadanía. Una alta valorización simbólica del libro estaba presente en los discursos de país. La máxima expresión de ello fue el proyecto editorial Quimantú durante la Unidad Popular, que con sus ediciones masivas y libros al valor de una cajetilla de cigarrillos buscaba romper las barreras de acceso de los sectores populares al libro. El libro era parte del proceso democratizador de la sociedad. Con el golpe y los autos de fe, el libro pasó de compañero de ruta a convertirse en elemento de sospecha y peligro. Aquí se marcó un antes y un después en la historia de la edición chilena; un antes y un después en la valorización simbólica del libro en la sociedad chilena. La misma aplicación del IVA al libro el año 1976, en momentos en que el horror represivo reinaba, expresa la voluntad explícita de la dictadura de limitar el acceso popular al libro, a la cultura. Mientras que a la televisión y los deportes se les eximía de IVA, al libro se le gravaba el impuesto.

Los gobiernos de la Concertación no trajeron consigo un destape cultural, como fue el caso en muchos países que salían de regímenes dictatoriales. La ley del libro de 1993 fue sin duda un paso importante, pero para nada revirtió lo que había instalado la dictadura en el país. No se tocó el IVA, tampoco algunas censuras, menos el dominio del mercado en el sector. No podemos desconocer, sin embargo, que mirado en el tiempo, es mucho lo que se ha realizado y avanzado: se han multiplicado las bibliotecas, las publicaciones, los fondos concursables, las editoriales, etc., pero falta articular y aunar las energías presentes, encauzarlas hacia un fin común para potenciar su desarrollo, y por ello es tan importante la implementación de la Política. En tal sentido, estamos ante una oportunidad histórica que no se puede desperdiciar. Depende de la convicción política de su relevancia, de la energía de muchos, del compromiso del actual ministro de Cultura, Ernesto Ottone; del Ministerio de Educación y de las diversas autoridades del ámbito cultural y educacional; de los funcionarios públicos que en cada dependencia son cruciales a la hora de instaurar y posibilitar el curso de las cosas, y de los diversos actores del mundo del libro y la cultura, cuyo compromiso, participación, insistencia y perseverancia va a marcar la diferencia.

Participar activamente en la producción de la historia del mundo

«Habiendo demostrado que todos son filósofos, aunque sea a su manera, inconscientemente, porque incluso en la mínima manifestación de cualquier actividad intelectual, el “lenguaje”, se halla contenida una determinada concepción de mundo, se pasa al segundo momento, al momento de la crítica y la conciencia, o sea a la cuestión: ¿es preferible “pensar” sin tener conciencia crítica, en forma disgregada y ocasional, o sea “participar” en una concepción de mundo “impuesta” mecánicamente por el ambiente externo, y por lo tanto por uno de los tantos grupos sociales en los cuales cada cual se encuentra automáticamente incluido desde su entrada en el mundo consciente... o es preferible elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente, y por lo tanto, en conexión con tal esfuerzo del propio cerebro, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la

historia del mundo, ser guías de sí mismos, y no ya aceptar pasivamente y supinamente desde el exterior el sello de la propia personalidad?» –Gramsci (2001: 245)

La lúcida reflexión de Antonio Gramsci en sus apuntes para “una introducción y una iniciación en el estudio de la filosofía y de la historia de la cultura” de sus *Cuadernos de la cárcel* hace explícita la importancia de la conciencia crítica, base de una real participación en la sociedad. Releva la importancia de constituirse en sujeto de su propia historia. En ese proceso personal y social que es el “momento de la crítica y la conciencia”, el libro y la lectura juegan un rol central. Podríamos decir que leer es parte del camino hacia una “propia concepción del mundo consciente y críticamente”, en la posibilidad de “ser guía de sí mismo”. En tal sentido, cuando en nuestro país se está finalmente implementando de manera participativa *La Política Nacional de la Lectura y del Libro*, en el fondo está en juego la participación ciudadana en dos niveles muy distintos: a primera vista, la manera cómo se instaura la Política misma y el rol de la ciudadanía en este proceso, tema que ha recorrido este artículo; pero, en el fondo y lo más importante, está en juego un tema mucho más relevante cuyo alcance sobrepasa con creces la Política del Libro misma: cual es la posibilidad de potenciar una participación consciente de la sociedad toda, que mujeres y hombres de nuestra sociedad puedan “elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guías de sí mismos”

Bibliografía

Bachelet, Michelle (2013), *Chile de todos, programa de gobierno 2014-2018*, Michelle Presidenta. En: <<http://michellebachelet.cl/programa/>>

Bourdieu, Pierre (1999), «Une révolution conservatrice dans l'édition», en *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 126, n.º1, pp. 3-28, Francia.

Centro Microdatos Universidad de Chile y OTIC Cámara Chilena de la Construcción (2013), *Segundo Estudio de Competencias Básicas de la Población Adulta 2013 y Comparación Chile 1998-2013*. Santiago de Chile; Cámara Chilena de la Construcción.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2005), *Política Nacional de la Lectura y el Libro*. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2006), *Política Nacional de la Lectura y el Libro*. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2014), Proceso participativo de elaboración de la PNLL, Mesa de industria e internacionalización. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2015), *Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020*. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Editores de Chile, Cámara del Libro, Furia del Libro (2013), *Carta a los candidatos a la Presidencia de la República*. Santiago de Chile; Editores de Chile, Cámara del Libro, Furia del Libro.

Editores independientes de Chile (2000), *Manifiesto*. Santiago de Chile; Editores independientes de Chile.

Enríquez-Fuentes, Helena (2008), *El comercio de libro entre España y América Latina. Disonancia en la reciprocidad*. París; Alianza Internacional de Editores Independientes.

Escalante Gonzalbo, Fernando (2007), *A la sombra de los libros. Lectura, mercado y vida Pública*. México; El Colegio de México.

Fundación Chile 21 y Asociación de Editores de Chile (2005), *Una política de Estado para el libro y la lectura. Estrategia integral para el fomento de la lectura y el desarrollo de la industria editorial en Chile*. Fundación Chile 21 y Asociación de Editores de Chile, Santiago de Chile.

Gramsci, Antonio (2001), *Cuadernos de la cárcel, Tomo 4*. México; Ediciones Era.

Mesa de Industria e Internacionalización del libro (2014), propuestas Política del Libro y la Lectura. Santiago de Chile; Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Ministerio de Educación (1993), «Ley 19.227, que crea Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura», en *Diario oficial*, Sábado 10 de Julio.

Noel, Sophie (2012) *L'édition indépendante critique: engagements politiques et intellectuels*. Francia; Presses de l'Enssib, Villeurbanne.

Soto, Hernán y Lawner, Miguel (2011), *Orlando Letelier: el que lo advirtió. Los Chicago Boys en Chile*. Santiago de Chile; LOM ediciones.

Subercaseaux, Bernardo (2010), *La historia del libro en Chile*. Santiago de Chile; LOM ediciones.

Unesco (2005), *Convención Internacional para la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales*. Unesco, París, Francia.

Reseña biográfica

Paulo Slachevsky Chonchol. Nace en Santiago en 1964. Trabaja como fotógrafo entre 1983 y 1989, cubriendo la movilización social contra la dictadura militar. En 1990, junto a Silvia Aguilera, funda LOM ediciones, editorial que a la fecha tiene más de mil quinientos títulos publicados, el catálogo vivo más grande de Chile. Fue presidente fundador de la Asociación de Editores de Chile, que reúne hoy a cincuenta y cinco editores independientes y universitarios (en la actualidad nuevamente la preside), y de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural. Fue vicepresidente de la Federación Internacional de Coaliciones para la Diversidad Cultural. Integra el Observatorio del Libro y la Lectura. Fue condecorado como Caballero en la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia en agosto de 2005 y Oficial de la misma Orden el 2014.

Resumen

El libro y la lectura, un asunto público

El libro y la lectura son asuntos de interés público, claramente transversales a muchos de los desafíos que tenemos como país. Para mejorar la educación, democratizar la sociedad y generar mayores condiciones de igualdad, se hace necesario cambiar la relación de la ciudadanía con el libro. Por ello es tan importante que el Consejo Nacional del Libro y la Lectura haya centrado su quehacer, durante el primer periodo de este gobierno, en elaborar la nueva Política Nacional del Libro y la Lectura, como el haber dado inicio a su implementación. Esta Política, construida a través de un proceso participativo en el que recoge parte importante de las propuestas, es una estrategia sistémica que aborda toda la cadena del libro, potenciando su democratización en la sociedad chilena. También busca fortalecer las condiciones para que como país tengamos un rol proactivo en la elaboración y producción de conocimiento, buscando resquebrajar el colonialismo cultural que nos domina y la brutal desigualdad en el intercambio Norte-Sur.

Décadas de dominio neoliberal llevaron a su extremo la sacralización del mercado, que permeó todos los ámbitos de la sociedad chilena, privatizando completamente nuestras vidas, y el libro fue también absorbido por la lógica neoliberal, relegando su sello cultural, dominando su carácter comercial. La resistencia a ese dominio comercial dio lugar al movimiento de editores independientes. En recuperar el carácter cultural, social y público del libro se expresa el sentido mismo de esa resistencia.

El artículo recorre así la construcción participativa de la Política, que nace desde la sociedad civil y de las propuestas anteriores, nunca implementadas. También de los mecanismos participativos en su implementación actual y los desafíos internos y externos que este camino debe enfrentar, de cómo esta supera la acción que ha tenido el estado en el ámbito del libro durante la postdictadura, buscando

activar la producción intelectual local, recuperando el sentido social y cultural del libro por sobre su carácter comercial, potenciando una acción conjunta del espacio público y la sociedad civil, más allá de las lógicas del mercado.

El artículo aborda también las tensiones entre comercio y cultura que cruzan el mundo del libro, poniendo particular énfasis en el movimiento de editores independientes, que ha centrado su accionar en el espacio público.

Por último, el artículo enfatiza que con la *Política Nacional de la Lectura y del Libro* está en juego la participación ciudadana en dos niveles muy distintos: en el cómo se instaura la Política misma y el rol de la ciudadanía en este proceso, y en la posibilidad de potenciar una participación consciente de la sociedad toda, que mujeres y hombres de nuestra sociedad puedan “elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guías de sí mismos”

Palabras claves

Chile - cultura - libro - lectura - participación - políticas públicas - ciudadanía - mercado - público - diversidad cultural - bibliodiversidad